

# CORTE DE APELACIONES

Caratulado:

**JUZGADO DE GARANTÍA DE IQUIQUE**

Rol:

**33-2024**

Fecha de  
sentencia:

31-01-2024

Sala:

Primera

Tipo  
Recurso:

Amparo art. 21 Constitución Política

Resultado  
recurso:

RECHAZADA

Corte de  
origen:

C.A. de Arica

Cita  
bibliográfica:

JUZGADO DE GARANTÍA DE IQUIQUE: 31-01-2024 (-), Rol N° 33-2024. En Buscador Corte de Apelaciones (<https://juris.pjud.cl/busqueda/u?dc3qo>). Fecha de consulta: 01-02-2024



Utilice una aplicación QR desde su teléfono para escanear este código y consultar la sentencia desde el sistema.

[Ir a Sentencia](#)



Corte Suprema  
Jurisprudencia y Normativa

Centro Documental  
Base Jurisprudencial  
<http://juris.pjud.cl>

Documento generado el 01-02-2024  
a las 10:03 hrs.

C.A. de Arica

Arica, treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece la Defensora penal pública penitenciaria María Francisca Sepúlveda Torres deduciendo amparo en favor de -----, quien cumple condena privativa de libertad en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en contra de la Jueza del Juzgado de Garantía de Iquique, Verónica Opazo Miranda, que dictó resolución de 16 de enero de 2024 en causa RIT N° 9127-2010, solicitando se deje sin efecto aquella y se declare la prescripción o, en subsidio, la media prescripción de la pena, por afectar las garantías constitucionales del amparado en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Explica que el amparado fue condenado por sentencia de 6 de mayo de 2013 a una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales asociadas al delito de violación de menor de 14 años.

Precisa que desde el 18 de octubre de 2010 hasta el 24 de diciembre de 2012 el condenado se encontró bajo la medida cautelar de prisión preventiva, continuando luego en arresto domiciliario total, hasta el 6 de mayo de 2013, oportunidad en que al no presentarse a la audiencia de lectura de sentencia se le despacha orden de detención en su contra.

Informa que el amparado fue detenido en Iquique el pasado 29 de octubre de 2023 y en audiencia de control de la detención, su defensa pidió abrir debate sobre la prescripción de la pena, resolviéndose finalmente que se discutiría en una audiencia posterior, el 5 de diciembre de 2023, misma en la que se rechazó la petición de la defensa y presentado un recurso de amparo, aquel fue también rechazado por la Corte de Apelaciones de Iquique. Solo apelado para ante la Excelentísima Corte Suprema se obtiene su revocación, ordenándose una nueva audiencia para debatir las peticiones de prescripción o media prescripción.

De esta forma se llega a la audiencia del 16 de enero de 2024 y pese a los datos que constan en la causa, esto es, que la sentencia quedó firme el 1 de agosto de 2013, que la detención del amparado ocurrió el 29 de octubre de 2023 y que de acuerdo con documentos emitidos por el Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones de Chile de 22 de septiembre y 5 de diciembre de 2023 que da cuenta que no registra entradas ni salidas de Chile, se niega su

petición.

Lo anterior haciendo eco de la teoría presentada por el Ministerio Público en cuanto a que el amparado se encontraba en Bolivia, de lo que no existen antecedentes judiciales concretos.

Estima que la resolución recurrida es arbitraria, ilegal, confusa y extremadamente extensa, no quedando claro los motivos de hecho y de derecho en que la recurrida basó su decisión, calincando la audiencia de juicio, dando por cierto que el amparado estuvo en Bolivia sin tener certeza del tiempo, que lo hizo bajo un nombre supuesto y que hubo suspensión de la prescripción al existir presentaciones por parte de la defensa particular antes del cómputo de los diez años, que daban cuenta que se mantenía en contacto con un abogado, aun cuando lo cierto y objetivo es que el amparado efectivamente se presentó a una audiencia por zoom el 20 de octubre de 2023, pero luego es detenido el 29 de octubre de 2023.

Pide al tenor del artículo 98 del Código Penal declarar la prescripción de la pena o en subsidio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal declarar la media prescripción, debiendo entenderse el hecho revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calincadas y de ninguna agravante, pidiendo que la pena se nje en presidio menor en su grado medio en 541 días, la que se encuentra cumplida por el mayor tiempo de privación de libertad del condenado en esta causa, esto es, 2 años y 306 días.

Evacúa informe la Jueza Titular del Juzgado de Garantía de Iquique, haciendo una detallada descripción del proceso, destacando que el amparado fue condenado por sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique de 6 de mayo de 2013 como autor del delito de violación, en carácter de reiterado, en contra de una menor de 14 años a la pena de diez años y un día, más las accesorias legales correspondientes, no siendo habido para cumplir la condena, despachándose una orden de detención en su contra.

Hace presente que años después el 27 de junio de 2023 un abogado particular del condenado conduciendo mandato de aquel, pidió audiencia para discutir la prescripción, lo que se hizo el 20 de octubre de 2023, rechazándose la petición, posteriormente es detenido el 29 de octubre de 2023 y nuevamente se pide discutir la prescripción, la que una vez más es rechazada en audiencia de 5 de diciembre de 2023.

De este modo, y habiéndose acogido un amparo por falta de fundamentación en la resolución de

5 de diciembre de 2023, con fecha 16 de enero de 2024 se lleva a nuevamente la audiencia, en la que la defensa solicita se declare la prescripción de la pena o en subsidio, la media prescripción de la misma, renriendo que a su juicio han transcurrido todos los plazos establecidos por ley al efecto, existiendo antecedentes concretos que dan cuenta que el condenado no registra condenas ni procesos vigentes posteriores y principalmente, que nunca se ausentó del territorio nacional desde el año 2010 a esta fecha. Para fundar sus pretensiones, incorporó informes de PDI que dan cuenta de la ausencia de movimientos migratorios del condenado y un informe social elaborado por una trabajadora social de la propia Defensoría quien a su vez, a partir de lo informado por el propio condenado y sus familiares, renere que éste no había salido del país en todo el período transcurrido desde que fue dictada la sentencia hasta esta fecha.

Por su parte, el Ministerio Público incorporó sendos y contundentes antecedentes que demostraban absolutamente todo lo contrario, es decir, una larga ausencia del condenado del territorio nacional, por haber estado radicado en el vecino país de Bolivia durante los años 2015 hasta el año 2019 a lo menos, con un nombre falso, desarrollando actividades laborales y académicas en una Universidad de dicho país, participando activamente como profesor de música en la comunidad universitarios y también activamente, como músico en diversos actos artísticos en la ciudad de Cochabamba durante dicho período de tiempo, desarrollando en dicho país y dicha ciudad en particular, toda una vida con su nueva y falsa identidad, documentación boliviana falsincada de su nueva identidad, teniendo domicilio particular y laboral allá, y también manteniendo relaciones de amistad y sentimentales en dicho país y con personas de nacionalidad boliviana ligadas al mundo universitario donde se desempeñaba.

Esos antecedentes consistieron en completos informes policiales, elaborados a propósito de órdenes de investigar expedidas por la Fiscalía, precisamente con la nnalidad de dar con el paradero del condenado y acreditar su estancia prolongada fuera del país.

Lo anterior, sumado al hecho de que en las búsquedas policiales del imputado en Chile este nunca fue habido, ya señalando la PDI en sus informes del año 2013 que existían contundentes antecedentes sobre el abandono del país del condenado y habiéndose acreditado su estancia en Bolivia de manera constante desde el año 2015 a 2019 a lo menos, se sostuvo, que no se cumplían los requisitos para declarar la prescripción ni la media prescripción de la pena impuesta.

En dennitiva estima que no ha transcurrido el plazo de la prescripción, como quiera que

compareció el sentenciado en el mes de junio del año 2023, a través de su abogado, por lo que con esa fecha se presentó al procedimiento, se halla presente en el juicio y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 del Código Penal, “el tiempo de la prescripción comenzará a correr desde la fecha de la sentencia de término”, que puede considerarse la fecha en que se dictó la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de nulidad (26 de julio de 2013), la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique que dispuso el cúmplase de ese fallo de nulidad (31 de julio de 2013) o aquella del Juzgado de Garantía que ordenó dar cumplimiento al artículo 468 del Código Procesal Penal (2 de agosto de 2013 ) o que dispuso la aprehensión del condenado para hacer cumplir lo resuelto (3 de agosto de 2023). Cualquiera de estas que se considere como sentencia de término y considerando la fecha que el sentenciado se presentó al juicio (27 de junio de 2023), no transcurrió el plazo de 10 años ni de años doblados por el tiempo que estuvo fuera del país y que exige el legislador para hacer aplicable la prescripción y la media prescripción.

Se trajeron los autos en relación

#### CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo puede ser deducido a favor de toda persona que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, a nn de que se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, cabe tener presente que el recurso de amparo exige para su procedencia que la privación de libertad de la persona por quién se recurre, obedezca a una decisión ilegal, esto es que no se sustente en norma alguna o que sea contraria a una existente. En el presente caso la supuesta decisión tildada de ilegal y arbitraria de parte de la jueza recurrida, lo es, por no acceder a la solicitud de prescripción y media prescripción invocada por la defensa de ----.

TERCERO: Que, dispone el artículo 98 del Código Penal, en lo que importa, que el tiempo de la prescripción comienza a correr desde la fecha de la sentencia de término, y si el responsable se ausentare del territorio de la República, reza el artículo 100 del mismo texto legal, la pena prescribe contando por uno cada dos días de ausencia.

Por otro lado, la pena impuesta al amparado, atendida su naturaleza, prescribe en 10 años contados desde la sentencia de término, en este caso desde el 26 de julio de 2013, fecha que corresponde al día en que se rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de primer grado.

CUARTO: Que, asimismo, el artículo 100 del Código Penal no precisa ni tampoco identifica las pruebas idóneas para acreditar la ausencia del territorio nacional, sino únicamente mandata acreditarla. En este entendido, pretender que los informes de Policía de Investigaciones Ordinarios N° 1705 y 2211 de 22 de septiembre y 5 de diciembre de 2023, respectivamente, que dan cuenta que no existen movimientos migratorios regulares por parte del amparado, sea el único medio para acreditar su ausencia del territorio nacional, signifique desconocer una realidad empírica que sucede a diario en las fronteras del país, especialmente en la zona norte, que se manifiesta mediante ingresos y egresos clandestinos por pasos no habilitados.

QUINTO: Que, es del caso señalar que el Ministerio Público, en la audiencia respectiva, aportó abundante prueba para sostener sus pretensiones, recogida en diferentes informes policiales que demostrarían que el amparado habría estado fuera del país entre los años 2015 a 2019 con una identidad distinta a la propia e incluso trabajando en una universidad de Cochabamba, Bolivia, durante los años 2017 a 2018, todo lo cual fue ponderado por la jueza de garantía en la resolución respectiva, argumentando latamente y con precisión las razones por las cuales desechó la pretensión de la defensa, por lo que no se vislumbra ninguna ilegalidad en su proceder.

SEXTO: Que finalmente, a mayor abundamiento, esta Corte estima que la presente acción constitucional no es la vía idónea para abordar esta controversia, toda vez que no está en condiciones para valorar la prueba rendida por las partes pues no la conoce directamente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo del año 1932, se declara:

Que, SE RECHAZA la acción constitucional de amparo interpuesta en favor de ----- en contra del Juzgado de Garantía de Iquique.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad

Rol N° 33-2024 Amparo.